MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADA

PROYECTO DE ORDEN PRE/XXX/2022, DE XX DE XXXXXX, POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO	3
I. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ABREVIADA.....	8
II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA.....	8
1. Motivación.....	8
2. Fines y objetivos perseguidos.....	8
3. Análisis de alternativas.....	8
4. Adecuación de la norma a los principios de buena regulación.....	9
5. Plan Anual Normativo.....	10
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO.....	10
IV. ANÁLISIS JURÍDICO.....	12
1. Fundamentación jurídica y rango normativo.....	12
2. Adecuación al orden de distribución de competencias.....	12
3. Normas que quedarán derogadas.....	13
4. Justificación de la entrada en vigor.....	13
V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.....	13
VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS.....	14
Impacto económico y presupuestario.....	14
Cargas administrativas.....	14
Impacto por razón de género.....	15
Impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.....	15
Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.....	15
VII. EVALUACIÓN <i>EX POST</i>	15

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente	Ministerio de Trabajo y Economía Social	Fecha	Noviembre 2022
Título de la norma	Proyecto de Orden por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social		
Tipo de Memoria	Normal ☐ Abreviada ☒		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Creación de un Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se inscriban los poderes otorgados para actuar mediante representante en el ámbito del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en este último caso cualquiera que sea la Administración Pública con la que deban relacionarse en cada caso en el marco de sus competencias.		
Objetivos que se persiguen	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir la normativa ya en vigor sobre administración electrónica, contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en sus normas de desarrollo. • Facilitar el ejercicio del derecho de representación de los ciudadanos, sin coste alguno, para relacionarse con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un procedimiento administrativo, incluidas, en su caso, las actuaciones previas a dicho procedimiento, así como con las Administraciones que participan en el procedimiento sancionador en el orden social. • Establecer modelos de poderes para su utilización en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. • Contribuir a conseguir una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, que permita agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de tramitación. 		
Principales alternativas consideradas	Las alternativas serían no proceder a realizar ninguna regulación específica, en cuyo caso quienes quisieran actuar a través de representante presentarían un poder general, y el trámite de comprobación exigiría acudir a REA-AGE y examinar el poder general.		

	<p>O bien proceder a la adhesión del Electrónico de Apoderamientos de la Administración General de Estado, debiendo realizar una serie de trámites farragosos, que además no cubriría ni a las Inspecciones de Trabajo del País Vasco y Cataluña, ni a las comunidades autónomas.</p> <p>Por todo ello, se opta por la creación de un Registro electrónico propio de apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que permite hacer un poder conjunto para actuar ante el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Inspecciones de Trabajo transferidas y las Autoridades estatales o autonómicas que resuelven procedimientos sancionadores en el orden social y procedimientos liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.</p>
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Base jurídica y rango normativo	<p>El proyecto se fundamenta en lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular en sus artículos 5 y 6; y en el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, artículos 32 y 33.</p> <p>La norma tiene rango de Orden ministerial, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.</p>
Adecuación al orden de competencias	<p>La orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 7ª, 17ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; y procedimiento administrativo común.</p>
Estructura de la Norma	<p>Consta de un preámbulo, 14 artículos, tres disposiciones adicionales una disposición transitoria y tres disposiciones finales, junto con cinco anexos.</p>
Normas que quedarán derogadas	<p>La presente orden ministerial no deroga expresamente ninguna norma.</p>

Justificación de la entrada en vigor	La norma proyectada entrará en vigor a los 20 días de su publicación.	
DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS		
Consulta pública	Sí ☒ No ☐ Se ha realizado consulta pública a tenor del artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, publicándose en el punto de acceso de participación pública de la página Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.	
Audiencia e información públicas	Sí ☒ No ☐ Se ha dado cumplimiento a tenor del artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.	
Tramitación urgente		
Informes recabados	<p>El proyecto se ha sometido a informe de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se recabará informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.</p> <p>También deberá recabarse informe de la Agencia Española de Protección de Datos.</p> <p>El proyecto ha de recibir la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.</p> <p>Se recabará informe del Ministerio de Política Territorial.</p> <p>Finalmente, debe recabarse dictamen del Consejo de Estado.</p>	
ANÁLISIS DE IMPACTOS		
Impacto económico y presupuestario	Efectos sobre la economía en general.	☒ impacto presupuestario.

	En relación con la competencia	☒ La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. ☐ La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. ☐ La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	☒ Supone una reducción de cargas administrativas. ☐ Incorpora nuevas cargas administrativas. ☐ No afecta a las cargas administrativas.
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma ☒ Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. ☐ Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.	☒ Implica un gasto: ☐ Implica un ingreso. ☐ Impacto neutro
Impacto de género	La norma tiene un impacto de género:	Negativo ☐ Nulo ☒ Positivo ☐

Otros impactos considerados	<p>La norma proyectada no tiene impacto en materia de familia, infancia y adolescencia.</p> <p>La norma tiene un impacto medioambiental positivo, en la medida en que reduce el uso del papel en la actividad administrativa</p>
------------------------------------	--

I. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ABREVIADA.

Esta memoria se ha elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por la que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, se ha optado por la elaboración de una memoria abreviada puesto que del proyecto no se derivan impactos apreciables en los ámbitos a los que alude el artículo 2 del citado real decreto (impacto económico o presupuestario, impacto de género, en la infancia y adolescencia o en la familia).

II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA.

1. Motivación

La justificación de la aprobación de la norma proviene de la necesidad de realizar el desarrollo normativo del artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del artículo 33 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

2. Fines y objetivos perseguidos

- Cumplir la normativa ya en vigor sobre administración electrónica, contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en sus normas de desarrollo.
- Facilitar el ejercicio del derecho de representación de los ciudadanos, sin coste alguno, para relacionarse con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un procedimiento administrativo, incluidas, en su caso, las actuaciones previas a dicho procedimiento, así como con las Administraciones que participan en el procedimiento sancionador en el orden social.
- Establecer modelos de apoderamientos para su utilización en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Contribuir a conseguir una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, que permita agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de tramitación.

3. Análisis de alternativas

Las alternativas a la norma que regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, serían las siguientes, descartadas por las razones que se exponen a continuación:

- Adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General de Estado (REA AGE):

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendría que elaborar sus propios formularios de apoderamientos para actuar ante ella, para todo tipo de actuación ante ella o para actos determinados.

Pero el trámite de apoderamiento sería muy farragoso, además de que esta opción no serviría para las comunidades autónomas como Autoridades Laborales que resuelven los procedimientos sancionadores, que tendrían que gestionar sus trámites a través de registros de apoderamientos autonómicos. Tampoco podría cubrir a las Inspecciones de Trabajo transferidas en Cataluña y País Vasco.

De esta manera, incluso en el marco de una única actuación inspectora, una empresa inspeccionada podría tener que hacer diversos apoderamientos ante distintos Registros Electrónicos de Apoderamientos, incrementando notablemente la carga administrativa que pesa sobre los sujetos que se relacionan con la Inspección.

- Ni adhesión al REA AGE, ni proceder a ninguna regulación:

En este escenario, quienes quisieran actuar a través de representante presentarían un poder general, y el trámite de comprobación exigiría acudir a REA-AGE y examinar el poder general, a fin de determinar si el representante tiene poder suficiente para realizar actos ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, obligaría a las Autoridades Laborales de las comunidades autónomas a comprobar igualmente si el representante tiene poder suficiente para actuar ante ellas.

Por todo ello, se opta por la creación de un Registro electrónico propio de apoderamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que permite hacer un poder conjunto para actuar ante el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Inspecciones de Trabajo transferidas y las Autoridades estatales o autonómicas que resuelven procedimientos sancionadores en el orden social y procedimientos liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

4. Adecuación de la norma a principios de buena regulación

Estos preceptos, cumpliendo con los criterios de economía normativa y simplificación aúnan en un único registro los apoderamientos para que un representante pueda actuar en nombre de un interesado ante las Administraciones Públicas.

Esta norma se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, al encontrar su justificación en la necesidad de hacer operativo y materializar el derecho de la representación a los ciudadanos, en los términos previstos tanto en la ley como en el reglamento, así como agilizar los procedimientos

administrativos en el ámbito del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándolos de mayor seguridad y facilitando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante el Sistema.

También cumple con el principio de proporcionalidad dado que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, sin que sea restrictiva de derechos, sino al contrario, garante de los mismos, de acuerdo con la regulación legal que desarrolla, sin que conlleve obligaciones para los ciudadanos.

Asimismo, la norma es coherente con el principio de seguridad jurídica. El registro da cobertura jurídica a los interesados que vayan a hacer uso de estos derechos de representación y a las unidades tramitadoras de los procedimientos correspondientes. Para ello permite constatar que la representación del interesado a favor de apoderado se realiza conforme a unos procedimientos establecidos, eliminando posibles dudas y actuaciones no amparadas por esta normativa.

Por último, la norma, con su regulación y rango normativo, cumple con el principio de eficiencia dado que supone el medio más adecuado y sencillo para cumplir los objetivos propuestos, minora las cargas administrativas para los ciudadanos y, si bien su aplicación efectiva exige adaptaciones en los medios utilizados por el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para relacionarse con los ciudadanos, su coste es totalmente proporcionado a los beneficios que reporta.

5. Plan Anual Normativo

Esta orden Ministerial no se incluye en el Plan Anual Normativo a que se refiere el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Estructura

El proyecto de Orden Ministerial consta de una parte expositiva, catorce artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, tres disposiciones finales y cinco anexos.

Contenido de la Orden

El **artículo 1** define el objeto de esta Orden, que es regular los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante, REA-ITSS).

El **artículo 2** establece el ámbito de aplicación, indicando que se inscribirán en el REA-ITSS, en todo caso:

- Los apoderamientos para actuar ante el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una actuación administrativa o en procedimiento administrativo, incluidas, en su caso, las actuaciones previas a dicho procedimiento, o para realizar determinados trámites.

Y que se podrán inscribir igualmente:

- Los apoderamientos para actuar ante la comunidad autónoma, en procedimientos sancionadores en el orden social cuya competencia para resolver le corresponda, o para determinados trámites.
- Los apoderamientos para actuar ante el organismo autonómico competente de inspección de trabajo en un procedimiento administrativo –incluidas, en su caso, las actuaciones previas a dicho procedimiento–, o para realizar determinados trámites.
- Los apoderamientos para actuar ante el órgano u organismo de la Administración General del Estado competente para resolver, en procedimientos sancionadores en el orden social o procedimientos liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, o para realizar determinados trámites.

El **artículo 3** recoge los tipos de apoderamientos, que son los siguientes:

- Apoderamiento para cualquier actuación recogida en el anexo I de la Orden ante cualquiera de las Administraciones que utilice el REA-ITSS.
- Apoderamiento por trámites y/o por Administración competente.

El **artículo 4** establece la ubicación del REA-ITSS, y que será el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien corresponde la titularidad y gestión del mismo, así como otra serie de funciones que garanticen su buen funcionamiento.

El **artículo 5** define quién podrá ser poderdante y apoderado. Podrán otorgar poder en favor de otro las personas físicas, personas jurídicas con capacidad de obrar, que tengan la condición de denunciante, sujeto inspeccionado o sujeto interesado; y podrán ser apoderados las personas físicas con capacidad de obrar, así como las personas jurídicas cuando tengan previsto en sus estatutos la posibilidad de actuar en representación de un tercero ante las administraciones públicas.

El **artículo 6** se refiere al procedimiento de otorgamiento del poder, que podrá iniciarse a solicitud del poderdante o del apoderado mediante comparecencia electrónica en la sede del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien para los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente en el ámbito del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en el ámbito de los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, también podrá realizarse mediante comparecencia física en una oficina del OEITSS o en las oficinas de asistencia

en materia de registros de otras administraciones públicas u organismos, para la posterior remisión al REA-ITSS.

Señala su apartado segundo que estas formas para iniciar el procedimiento de otorgamiento podrán ser igualmente utilizadas para la modificación de los datos y de la vigencia de los poderes, así como para la aceptación, confirmación, renuncia y renuncia de los mismos.

El **artículo 7** regula la forma de realizar la aceptación del poder por el apoderado y la confirmación del poder por el poderdante, señalando que serán requisitos necesarios para su inscripción, y estableciendo especialidades para el caso de que el poder se otorgue en favor de persona jurídica.

El **artículo 8** regula la inscripción de los apoderamientos, estableciendo que será en ese momento cuando los poderes surtan plenos efectos.

El **artículo 9** determina el contenido del REA-ITSS, enumerando los datos que deben constar en cada asiento.

El **artículo 10** determina que el plazo de vigencia de los apoderamientos inscritos será de cinco años, pudiendo modificarse, revocarse o prorrogarse la vigencia del mismo.

El **artículo 11** regula la renuncia y la revocación del poder, indicando que solo surtirán efectos desde que se produzca su inscripción.

El **artículo 12** regula la consulta al registro por parte de los interesados, pudiendo ser solo sobre los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado, así como la obtención de certificados de los poderes.

El **artículo 13** determina que, en materia de protección de datos, el REA-ITSS se ajustará a lo previsto al respecto en la normativa española y europea directamente aplicable sobre protección de datos personales.

El **artículo 14** se refiere a la necesaria interoperabilidad del registro con otros registros de apoderamientos generales o particulares.

La **disposición adicional primera** indica que las referencias que se efectúan en la Orden a las personas jurídicas deben entenderse hechas, asimismo, a las entidades sin personalidad jurídica.

La **disposición adicional segunda** recoge la posibilidad de que las Administraciones Públicas y Organismos que participen en los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social se adhieran al REA ITSS mediante la suscripción de un acuerdo en los términos previstos en el artículo 65 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

La **disposición adicional tercera** indica que la Orden no implica incremento de dotaciones o retribuciones, ni de gasto de personal, ni de cualesquiera otros gastos a cargo del sector público, ni supone disminución de ingreso alguno para la Hacienda Pública Estatal y se llevará a cabo con las disponibilidades presupuestarias existentes.

La **disposición transitoria única** recoge la ubicación provisional del REA-ITSS de forma que mientras no esté operativa la sede electrónica del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el REA-ITSS estará disponible en la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La **disposición final primera** expresa el título competencial que ampara esta regulación.

La **disposición final segunda** indica que las facultadas de aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden corresponde a la persona titular de la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la aprobación de los formularios que, en su caso, resulten precisos para la gestión del REA-ITSS.

La **disposición final tercera** establece la fecha de entrada en vigor.

El anexo I recoge el listado de trámites que pueden ser objeto de apoderamiento apud acta.

El anexo II establece el modelo de poder apud acta.

El anexo III establece el modelo de prórroga del poder.

Los anexos IV y V establecen los modelos de renuncia y revocación del poder, respectivamente.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

1. Fundamentación jurídica y rango normativo

La base jurídica del proyecto de orden ministerial se encuentra en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 33 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en materia de administración electrónica.

También es desarrollo de las normas básicas en materia de inspección de trabajo y seguridad social, conforme a:

- Disposición final primera del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Disposición final única Dos del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

En cuanto al rango normativo de la norma, ésta ha de adoptar la forma de orden ministerial de conformidad con lo previsto en el artículo 24.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, siendo desarrollo de las normas básicas de actuación y procedimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes citadas.

2. Adecuación al orden de distribución de competencias

La norma proyectada tiene el carácter de norma de desarrollo del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. En consecuencia, tiene el ámbito de aplicación y el mismo fundamento competencial que las normas citadas.

[Por otra parte, en la tramitación de la norma se ha solicitado informe de las Comunidades Autónomas y se ha recabado informe de distribución competencial, con arreglo a lo previsto en el artículo 26.5, último párrafo, de la Ley del Gobierno.]

3. Normas que quedarán derogadas

No se dispone la derogación de ninguna norma.

4. Justificación de la entrada en vigor

Dado que esta Orden no plantea nuevas obligaciones jurídicas, se establece la *vacatio legis* general establecida en el Código Civil, lo que supone que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Se ha realizado trámite de consulta pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, publicándose en el punto de acceso a la participación pública en proyectos normativos de la página Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el texto se ha publicado en el citado sitio web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Además, se recabará específicamente información de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En relación con los **informes evacuados**, cabe indicar:

- 1) Se recabó informe de la Comisión Ministerial de la Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 j) de la Orden TES/1214/2021, de 29 de octubre.
- 2) Se recabará informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno.
- 3) Se debe recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.5, párrafo quinto, de la referida Ley del Gobierno.
- 4) Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.b) del Estatuto de la indicada Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1003, de 26 de marzo.
- 5) Se recabará informe de las Comunidades Autónomas. Además, el proyecto requiere informe de distribución competencial del Ministerio de Política Territorial, con arreglo a lo previsto en el sexto párrafo del artículo 26.5 de la Ley de Gobierno.
- 6) Al tratarse de una disposición reglamentaria dictada en ejecución de una ley, resulta preciso el **dictamen previo del Consejo de Estado**, por encontrarse entre los supuestos recogidos a tal efecto en los artículos 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, concretamente en el artículo 22.Tres.]

VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS

Impacto económico y presupuestario.

Se aprecia un impacto presupuestario, dado que, para la implementación del contenido de la Orden, debe crearse el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para lo que se procederá a licitar el proyecto.

Dicho impacto está cuantificado en un coste de 355.150 € como se recoge en la aplicación presupuestaria 19.103.291A.227.06, pero dicho proceso de licitación quedó desierto.

En la actualidad, se está tramitando un nuevo proceso de licitación.

Cargas administrativas.

La inmensa mayoría de las empresas españolas actúan ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través de profesionales (graduados sociales, abogados, etc.). Por tanto, el mecanismo de la representación será de uso generalizado en el ámbito del procedimiento sancionador en el orden social y liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social, al menos en dos aspectos:

- Las notificaciones de las actas de infracción, que practica la ITSS.
- La realización de trámites en el procedimiento sancionador o liquidatorio. En este sentido, téngase en cuenta que, según lo previsto en el artículo 5.5 de la LPACAP, “el órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.”

De acuerdo con lo anterior, en cada procedimiento sancionador o procedimiento liquidatorio de cuotas de la Seguridad Social existirán normalmente dos apoderamientos:

- Uno para que la ITSS proceda a notificar el acta de infracción.
- Otro para proseguir el procedimiento sancionador ante el órgano competente para resolver (presentación de escrito de alegaciones, notificación de la resolución, presentación de recurso de alzada...) o para resolver el procedimiento liquidatorio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por tanto, el hecho de que un único apoderamiento pueda acreditar la representación para actuar tanto ante la ITSS como ante la Autoridad Laboral competente para resolver el procedimiento sancionador o el procedimiento liquidatorio ante la TGSS supone una reducción importante de las cargas administrativas que debe soportar el administrado.

Para calcular dicho ahorro, se toma en consideración el año 2019, previo a la pandemia y, por ello, más extrapolable en términos de número de actuaciones inspectoras, procedimientos, etc. Y así:

- a) En el año 2019 el número de **procedimientos sancionadores** iniciados por la ITSS fue de 63.728. De ellos, la autoridad competente para resolver el procedimiento fue la ITSS en 8.719 ocasiones, mientras que el órgano competente para resolver correspondió a otra Administración en 55.009 casos.

Lo anterior quiere decir que, de no crearse el REA-ITSS, los presuntos sujetos responsables tendrían que acreditar la representación en 110.018 procedimientos (63.728 + 55.009), mientras que con el REA-ITSS el número de apoderamientos se reduciría a 63.728.

- b) En 2019 el número de actas de liquidación no coordinadas con actas de infracción fue de 14.167.

Lo anterior quiere decir que, de no crearse el REA-ITSS, los presuntos sujetos responsables tendrían que acreditar la representación en 28.334 procedimientos (14.167 x 2), ante la ITSS y ante la TGSS, mientras que con el REA-ITSS el número de apoderamientos se reduciría a la mitad.

De acuerdo con la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, el coste estimado de la inscripción electrónica en un registro es de 50€, de modo que el ahorro estimado de 3.458.800 €/año, calculado del siguiente modo:

Tipo apoderamiento	Número Apoderamientos		Coste (*50 €)	
	SIN REA-ITSS	CON REA-ITSS	SIN REA-ITSS	CON REA-ITSS
Apoderamientos vinculados a actas de infracción	63.728	63.728	3.186.400	3.186.400
Apoderamientos vinculados a procedimientos sancionadores	55.009	0	2.750.450	0
Apoderamientos vinculados a actas liquidación	14.167	14.167	708.350	708.350
Apoderamientos vinculados a procedimientos liquidatorios	14.167	0	708.350	0
		Coste	7.353.550	3.894.750
		Ahorro		3.458.800 €

Impacto por razón de género.

La norma proyectada carece de impacto por razón de género. Por otra parte, el lenguaje utilizado en la redacción de la futura norma no contiene expresiones sexistas.

Impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que el contenido del proyecto de orden ministerial no tiene impacto alguno en la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se señala que el contenido del proyecto, por las razones apuntadas, tampoco tiene impacto en la familia.

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cabe apreciar la existencia de impactos positivos en el uso de los medios y servicios de la Administración digital.

VII. EVALUACIÓN EX POST.

Esta norma no se incluye en el Plan Anual Normativo, al no ser una norma que deba someterse a aprobación del Consejo de Ministros, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

Por la misma razón, no está prevista su evaluación ex post.